



FUNDACIÓN CENTRO GUMILLA.

En defensa de la vida

El pasado 16 de mayo, los activistas Alfredo Infante, s.j y Marino Alvarado fueron notificados con una demanda en su contra, por el cargo de difamación hacía el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, luego de que una investigación realizada por el proyecto Lupa por la Vida, de la Fundación Centro Gumilla, determinara que Policarabobo es el principal responsable de al menos 221 presuntas ejecuciones extrajudiciales

Denunciar, así como visibilizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos parece incomodar a quienes ostentan el poder. Los últimos en pasar por la *guillotina* judicial en estos últimos días son Alfredo Infante, sacerdote jesuita y coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla, y Marino Alvarado, coordinador legal de Provea. Ambos, dirigen el proyecto Lupa por la Vida, destinado a monitorear, investigar y documentar la situación en el país, especialmente en materia de derechos fundamentales.

La investigación realizada por Lupa por la Vida determinó que, durante el 2021, en Venezuela ocurrieron 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 426 fueron, aparentemente, realizadas por las policías regionales. De este último dato se desprende que 221 personas fueron víctimas de la Policía del estado Carabobo.

Dada la letalidad de la policía regional a cargo del gobernador Rafael Lacava, tanto Infante como

Alvarado, fueron enfáticos en que, desde el Ministerio Público se abriera una investigación a la cadena de mando del cuerpo de seguridad carabobeño, ya que era necesario aclarar a fondo esta situación y que, además, familiares y víctimas tuvieran justa respuesta sobre la violación de derechos humanos, así como la condena y el enjuiciamiento de los responsables.

Hasta ahora llama la atención que desde el Ministerio Público, encabezado por Tarek William Saab, no se haya abierto ninguna averiguación hacia la denuncia presentada desde Lupa por la Vida, más cuando el país se encuentra bajo una investigación por parte de la Corte Penal Internacional. A pesar de que el propio fiscal general ha dicho en varias ocasiones que no hace falta tal averiguación en Venezuela ya que, a su juicio, en el país se respetan a cabalidad los derechos humanos.

La reacción de Lacava llega dos meses después de presentarse el informe, dando la trastocada judicial

de una demanda por difamación en contra de los activistas de derechos humanos antes referidos, lo cual supone una *pedra de tranca* más para aquellas personas que siguen, día y noche, acompañando a las víctimas y documentando la situación sobre los derechos fundamentales en diferentes regiones del país.

También llama la atención que siendo Lacava un hombre tan mediático, no haya hecho mención alguna en las plataformas digitales, ni siquiera para defender a los cuerpos de seguridad del estado Carabobo, adscritos a la policía regional. La respuesta tanto de Infante como de Alvarado ha sido parca. Ambos coinciden en su respuesta: mantenerse exigentes frente al Estado en defensa de los derechos humanos, y sentirse tranquilos “en paz con sus conciencias”, ante Dios y el país.

Al mismo tiempo, diferentes personalidades de la sociedad civil unieron esfuerzos y alzaron sus voces para condenar tal acción, iniciándose toda una adhesión de voluntades a través de los distintos medios y canales digitales para sumar solidaridades en favor de los defensores de derechos humanos. Dicha iniciativa ha sido encabezada por Colette Capriles, Alfredo Padilla, María Carolina Uzcátegui, Simón García, Pedro Benítez, León Arismendi, entre otros.

Ojalá y esto no se convierta en una excusa más para seguir obstruyendo la claridad sobre los diferentes casos de violaciones de derechos humanos que existen en el país.

ACERCAMIENTOS Y CONVERSACIONES: TURNO PARA LA SOCIEDAD CIVIL

El Gobierno de Nicolás Maduro sigue buscando espacios para el acercamiento con diferentes sectores sociales y políticos. Tales acciones, naturalmente, despiertan el rechazo de algunas facciones dentro de la sociedad, considerando que quienes participan en dichos encuentros son parte del denominado “colaboracionismo” que respalda, en mayor o menor medida, la perpetuación en el poder del chavismo-madurismo en Venezuela.

En días pasados, los integrantes del Foro Cívico sostuvieron un encuentro en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro y varios representantes del Gobierno venezolano, destacándose la participación de Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional. Dicho contacto se efectuó el 5 de abril, momento en el cual los representantes de la sociedad civil entregaron un pliego de peticiones al Gobierno, entre las que se destaca la necesidad de resolver la emergencia humanitaria compleja que padecen los venezolanos.

Para el sector oficial esta fue una oportunidad para insistir en que la crisis es responsabilidad de las sanciones que ha recibido la nación por parte de gobiernos extranjeros. También para mostrar una imagen de amplitud hacia el resto de la ciudadanía, que mantiene reservas sobre el modo de proceder que, en esta materia, han llevado adelante los funcionarios gubernamentales.

Hay que destacar que el Foro Cívico aprovechó la oportunidad para mostrar su disposición a contribuir a que los diferentes actores políticos busquen un entendimiento por el bien de Venezuela; en esa línea discursiva y de acción ha mantenido contactos y encuentros con las diferentes facciones partidistas para contribuir a la construcción de espacios de concordia.

La sociedad civil apuesta a que los niveles de confrontación disminuyan y, por el contrario, se procuren nuevos mecanismos abocados a la imperiosa necesidad de lograr resultados factibles, no solo en el campo político, sino también, y sobre todo, el social.

PRESIDENCIALES Y PRESIDENCIALES

El 2024 parece lejano, pero desde las diferentes organizaciones políticas comienzan a trazar estrategias y sacar cuentas de las posibilidades que tienen para imponer un candidato presidencial que supere con creces a los demás aspirantes.

Ya han salido a relucir nombres, unos más conocidos que otros, que pueden convertirse en el posible “rival” del chavismo-madurismo en la

próxima contienda electoral. Laidy Gómez, Gustavo Duque, Henrique Capriles Radonski, Delsa Solórzano, Andrés Velásquez, Henri Falcón, Javier Bertucci, Emilio Useche, María Corina Machado, Óscar Figuera, Ricardo Cusanno, Antonio Ecarri, entre otros, son algunos de los que han manifestado o han sido propuestos para asumir el reto de convertirse en un presidente del poschavismo. Tarea nada fácil, más cuando existe una oposición dividida que no consiga la fórmula para retomar los viejos triunfos políticos que logró en el pasado.

En las filas del chavismo-madurismo parece que la tarea será más sencilla. Todo indica que Nicolás Maduro será nuevamente el candidato para la contienda del venidero año 2024. De lo contrario, él mismo buscaría una forma estratégica de escoger “a dedo” un abanderado –sin mayores traumas ni complejos– que tenga la capacidad de mantener la cohesión dentro de las fuerzas oficiales.

La definición de un aspirante que aglutine a todo el entramado que adversa al actual Gobierno, tampoco es una tarea fácil. Cada fracción opositora tiene una propuesta, un mecanismo de selección distinto: primarias, consenso, acuerdos políticos o consulta popular, son solo algunos métodos que “van sonando” y han sido presentados por los partidos y algunos liderazgos emergentes.

Hasta el momento, parece que la opción de las elecciones primarias en las filas opositoras pudiera ser una idea a la cual todos se aproximen, siempre y cuando exista la amplitud necesaria para abarcar a una oposición que se ha diversificado en los últimos años.

El gran reto del liderazgo político para el 2024 será construir concordia y entendimiento en una sociedad hastiada de la confrontación sociopolítica.